



GD-F-008 V.9

Página 1 de 4

## **RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010005125 DEL 10/03/2017**

**"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"**

### **LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Resolución No. SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010 y en el artículo 16° del Decreto 416 de 2007,

#### **CONSIDERANDO:**

##### **1. ANTECEDENTES**

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16° del Decreto 416 de 2007, le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) definir la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado para los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Que mediante la Resolución N° SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.709 el día 14 de mayo de 2010, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios estableció la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado de conformidad con las definiciones y las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado establecidas en el Decreto 1447 de 2010, el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación en mención para los fines del Decreto 416 de 2007 y periodicidad de las mismas.

Que en los artículos 3°, 4° y 6° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 se estableció el procedimiento para la expedición de la certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado y se definieron los requisitos de información y documentación que el ente territorial debe acreditar para que esta superintendencia otorgue tal certificación.

Que el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, asignó a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación o no de la cobertura mínima de agua potable y alcantarillado de los entes territoriales que son beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias y en su artículo 8° le otorgó competencia para que decida sobre los recursos de reposición que se interpongan contra tales actos administrativos.

##### **2. DE LA RESOLUCIÓN DE NO CERTIFICACIÓN**

Que tal como lo establece el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 de 2010, las entidades territoriales debían enviar comunicación expresando su intención de ser certificados en coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información, acompañándola de la acreditación de la representación legal del solicitante y del poder correspondiente cuando se actuara a través de apoderado y reportar al SUI la información de que tratan los artículos 3° y 6° de la resolución en mención, antes del 30 de abril de cada año.



Que vencido el término para que el Municipio de UNE del Departamento de CUNDINAMARCA, presentara la solicitud de que trata el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 de 2010 y verificados los registros del archivo documental de esta Entidad, no se encontró manifestación de interés en ser certificado en coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado y por tal razón se procedió a NO CERTIFICARLO mediante la Resolución No. SSPD 20164010027465 de 29 de julio del 2016.

La referida resolución fue notificada personalmente el 22 de septiembre de 2016 tal y como se observa en el expediente.

Mediante escrito radicado bajo el No. 20165290680782 del 6 de octubre de 2016, el municipio interpuso oportunamente recurso de reposición contra la mentada resolución.

### 3. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO

3.1 El recurrente manifestó que no se presentó la solicitud de certificación en materia de coberturas mínimas, toda vez que se presentaron inconvenientes en el empalme y no recibió recomendaciones sobre el estado de reporte de información, lo cual conllevó a un retraso en los procedimientos administrativos, por lo que se debe contar con un asesor encargado de subir la información al SUI.

3.2 Adujo que el municipio ha trabajado arduamente para atender las obligaciones, pero al ser una nueva administración se han producido demoras para cumplir los requisitos, lo que no debe ser razón para castigar al ente territorial ya que las razones de incumplimiento son ajenas a la voluntad e intención del municipio

3.3 Informó sobre la recopilación de información a reportar y del reporte de la misma, con lo que pretende sea tenido en cuenta como justificación para sustentar el no reporte oportuno de la información y solicitó tener en cuenta sus argumentos para que el municipio puede atender cualquier eventualidad donde se puedan ver involucrados derechos fundamentales, ya que se debe recordar que se trata de recursos de regalías para el ente territorial que van destinados a servicios públicos domiciliarios.

### 4. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Ahora bien, para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Coordinación procederá a analizar el único argumento expuesto, de la siguiente manera:

- **Del argumento relacionado con no habersele informado a la nueva administración el proceso de empalme y la ausencia de requerimiento por parte de la Superintendencia.**

El recurrente manifestó que no se presentó la solicitud de certificación en materia de coberturas mínimas, toda vez que se presentaron inconvenientes en el empalme y no recibió recomendaciones sobre el estado de reporte de información, lo cual conllevó a un retraso en los procedimientos administrativos, por lo que se debe contar con un asesor encargado de subir la información al SUI.

Adujo que el municipio ha trabajado arduamente para atender las obligaciones, pero al ser una nueva administración se han producido demoras para cumplir los requisitos, lo que no debe ser razón para castigar al ente territorial ya que las razones de incumplimiento son ajenas a la voluntad e intención del municipio

Informó sobre la recopilación de información a reportar y del reporte de la misma, con lo que pretende sea tenido en cuenta como justificación para sustentar el no reporte oportuno de la información y solicitó tener en cuenta sus argumentos para que el municipio puede atender cualquier eventualidad donde se puedan ver involucrados derechos fundamentales, ya que se debe recordar que se trata de recursos de regalías para el ente territorial que van destinados a servicios públicos domiciliarios.

Con relación al argumento en comento se debe recordar que el proceso de certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado, se rige por lo dispuesto en la Resolución 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, que definió la metodología a observarse por parte de los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Por consiguiente, el acto administrativo de no certificación se expide no sólo para los municipios que manifestando su interés en obtenerla no cumplan con las exigencias normativas para el efecto, **sino también para todos aquellos que siendo beneficiarios de regalías y compensaciones monetarias no hayan manifestado interés en conseguirla, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 6 de la resolución en mención**, que señala:

*“Parágrafo 1°. Se entenderá que la entidad territorial que no presente la solicitud mencionada en el artículo 4° de la presente resolución, dentro de los plazos establecidos, no está interesada en obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, y por lo tanto, mediante acto administrativo motivado, la Superintendencia NO CERTIFICARÁ al respectivo ente territorial”.*

En efecto, el acto administrativo objeto de recurso de reposición bajo estudio, da aplicación a tal disposición toda vez que de una parte, el Municipio de Une - Cundinamarca fue relacionado como beneficiario de regalías directas y compensaciones monetarias en el radicado No. SSPD 20165290123362 y 20168100075612 del 1 de marzo de los corrientes, remitido a esta Entidad por la Agencia Nacional de Minería y de otra, **en atención a que el ente territorial no presentó a 30 de abril del 2016**, la solicitud de que trata el artículo 4° de la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010.

En este entendido, es claro que el ente territorial fue NO CERTIFICADO toda vez que NO manifestó su interés de obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado antes del 30 de abril de 2016, sin que sea necesario evaluar el cumplimiento del ente territorial a las demás exigencias establecidas en la norma.

Sobre el particular es preciso mencionar, que los plazos constituyen una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13° de la Ley 1564 de 2012 *“Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.*

La Corte Constitucional se ha pronunciado así, al respecto<sup>1</sup> en los siguientes términos:

*“Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicárlas.”, además advierte que “(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo.” (...) En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso”.*

En este entendido es claro que al dejarse vencer el término señalado en el artículo 4° de la Resolución No. 20101300015115 de 2010 sin solicitar la certificación objeto de estudio, la única decisión viable que podía tomar esta Superintendencia consistía en no certificar al ente territorial.

Por lo anterior no es válido señalar que con ánimo de prosperidad que en el empalme no le fueron informados los procedimientos a adelantar ante las entidades de vigilancia y control así como que no obtuvo un recordatorio al respecto por parte de la toda vez que es de recordar que el proceso de certificación es de carácter institucional y por tanto es el ente territorial como tal, quien debe acreditar su cumplimiento a los requisitos y recibe las consecuencias de una certificación o no certificación, con independencia del funcionario que desempeñara el cargo de Alcalde Municipal en el mismo y de las responsabilidades que se den al interior del ente territorial.

En consecuencia, una vez transcurrido el término para verificar que el ente territorial hubiera efectuado la solicitud de que trata el artículo 4° de la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010, este Despacho constató que el hoy recurrente no efectuó la misma, lo que conllevaba por expresa disposición normativa a que el municipio fuera no certificado, sin que pueda el ente

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería.

territorial excusarse en la ignorancia de la norma, toda vez que es claro que el Artículo 9° del Código Civil, establece que *"La ignorancia de las leyes no sirve de excusa"* así como del artículo 56 de la Ley 4 de 1913 (Código de Régimen Político) que en idéntico sentido *ad literam* establece que *"(...) No podrá alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla (...)".*

Ahora bien, el argumento presentado por el recurrente evidencia que pretende exonerarse de la responsabilidad establecida en la norma, manifestando que el Despacho debió requerirlo para que se allanara a cumplir lo establecido en la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010, lo que evidencia que el municipio pretende alegar su propia culpa su favor, respecto a lo cual, la Corte Constitucional en Sentencia No. C-083-95, en relación con el principio NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINE ALLEGANS / PRINCIPIO *"NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA"*/PRINCIPIO DE LA BUENA FE, ha sostenido:

*"... No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio, falta a la buena fé entendida como la ausencia de dolo, la conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue están amparados por éste..."*

Por consiguiente no es válido que el recurrente reconozca la propia culpa con el fin de derivar un beneficio trasladando su responsabilidad por un incumplimiento a la administración, tal y como sucedió en el caso concreto, máxime cuando es claro que la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010 no establece que la Superintendencia deba requerir al municipio o instarlo a que presente la solicitud de certificación y por el contrario sí establece que el ente territorial debe agotar un procedimiento para que se le expida dicha certificación, circunstancia última que no se presentó en el caso concreto.

Finalmente, se considera procedente recordar que el artículo 6° de la referida resolución preceptúa que la consecuencia de la no certificación, es el no permitir a la entidad territorial no certificada, el cambio de la destinación de sus recursos de regalías directas y compensaciones monetarias y en este entendido no es predicable que se pudiera afectar con la decisión del despacho, derechos fundamentales o los servicios públicos domiciliarios suministrados a los habitantes del municipio.

Así las cosas, no se accederá a revocar la resolución objeto de recurso, la cual en consecuencia será confirmada.

Por lo expuesto, este Despacho

#### **RESUELVE:**

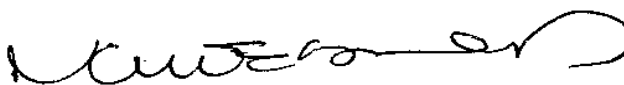
**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD 20164010027465 del 29 de julio de 2016, en lo referente al municipio de Une, departamento de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente la presente resolución al señor alcalde del Municipio de UNE, del Departamento de CUNDINAMARCA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 69 del C.P.A.C.A.

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNÍQUESE** el contenido de la presente Resolución al Departamento Nacional de Planeación - DNP.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**  
Bogotá D.C.



**MARIA EUGENIA SIERRA BOTERO**  
Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información